

Aire limpio oculta lado negativo de Covid-19

Región

En Honduras, incendios han devastado bosques al tiempo que los guardabosques se refugian para evitar contraer el Covid-19. En México, pescadores surcan ilegalmente el hábitat de la marsopa vaquita en peligro de extinción, ya sin ser obstaculizados por las patrullas ambientales. Y en Guatemala, aldeanos opuestos a proyectos mineros han tenido que suspender sus “campamentos de resistencia” que han mantenido en las entradas de las minas durante años.

En gran parte de América Latina, el confinamiento por el coronavirus ha socavado la capacidad de las autoridades, activistas y comunidades para proteger el medio ambiente. Los cielos despejados y las emisiones más bajas pueden señalar los beneficios colaterales de la parálisis global, dicen los expertos, pero también ocultan los riesgos. “Tal vez la naturaleza esté descansando, pero los delincuentes no”, dice Jean Paul Geoffroy, quien lidera una campaña de Sea Shepherd Conservation Society, una organización estadounidense sin fines de lucro, para proteger a la vaquita (*Phocoena sinus*) en su único hábitat en el Alto Golfo de California.

Desde México hasta Brasil, muchas de las comunidades rurales e indígenas cruciales para la protección de los bosques y la vida silvestre se están refugiando, al igual que los guardabosques y los activistas que las apoyan. Se han interrumpido los mercados de pescado, madera y productos agrícolas, privando a los lugareños de los ingresos que necesitan para vivir e invertir en la protección del hábitat.

El temor de que el nuevo coronavirus pueda infectar a la tripulación de las dos naves patrulleras de Sea Shepherd en el Alto Golfo impulsó en abril a esta organización a atracar las naves en el puerto de Mazatlán en el Pacífico, dice Geoffroy. Las lanchas monitorean a la población de vaquitas, que sigue disminuyendo, y confiscan redes de enmalle ilegales tendidas por pescadores furtivos de totoaba, un pez en peligro de extinción cuyas vejigas natatorias alcanzan grandes sumas en el mercado negro. Las vaquitas se enredan en las redes de enmalle y se ahogan; se cree que sólo quedan unas diez. “El distanciamiento social en un barco es extremadamente complicado”, dice Geoffroy. “Si una persona infectada se sube a mi barco y propaga el virus, todo se acabó”.

En tierra, el debilitamiento de la protección es evidente en la menoscabada respuesta a los incendios forestales y la tala ilegal. En Brasil, un repunte en la deforestación ha suscitado la militarización de la aplicación de la ley. (Véase artículo relacionado en Informe regional de este número.)

Jeremy Radachowsky, director del Programa Mesoamérica y Caribe Occidental de la estadounidense Wildlife Conservation Society (WCS), dice que los incendios esta primavera en el corredor forestal Moskitia, un bosque tropical en Honduras y Nicaragua, fueron los peores que se recuerden.

También se produjeron incendios en la Reserva de Biosfera Maya, un área protegida en el norte de Guatemala que forma parte del bosque maya, que llega a Belice y México. La Moskitia, hogar de grupos indígenas y vida silvestre, como tapires de Baird, jaguares, monos aulladores y guacamayos escarlatas, ha perdido un tercio de su bosque desde principios de la década de 2000 a medida que ganaderos y bandas criminales deforestan

tierras para criar ganado y construir pistas de aterrizaje. Los incendios también se han vuelto más graves debido al cambio climático.

Descarada usurpación de tierras

Pero los usurpadores de tierras se envalentonaron por el confinamiento, dice Radachowsky. Las comunidades locales, actores clave en la protección de los bosques, no pudieron conseguir alimentos y provisiones para los guardabosques y las brigadas locales de bomberos. La policía ambiental y las fuerzas militares fueron desviadas a la respuesta contra el Covid-19, añade. Ganaderos y delincuentes prendieron incendios en lo profundo del bosque y construyeron un camino hacia el territorio de los tawahka, cerca de la frontera con Nicaragua. De enero a fines de abril, la cantidad de incendios detectados por satélite en el área hondureña del bosque fue hasta 500 veces mayor que el promedio de los últimos 17 años, dice la WCS. “Este podría ser el principio del fin para ese bosque”, señala Radachowsky. “Es absolutamente devastador”.

Las comunidades que protegen los bosques locales encuentran ahora que los mercados para sus cultivos y madera están cerrados o son imposibles de alcanzar. En Moskitia, los agricultores tiraron su cosecha de palma xate, que se usa en decoraciones florales, dice Radachowsky. Ian Thompson, director de The Nature Conservancy en Brasil, dice que en el estado de Pará tuvieron que desplegarse equipos, previamente examinados por si tenían el Covid-19, para ayudar a las comunidades a llevar nueces de Brasil al mercado.

En Guatemala, los aldeanos que han tenido que suspender las sentadas contra la minería afirman que los propietarios de las minas están utilizando la pandemia para tratar de obtener apoyo.

Miembros de la comunidad indígena xinka que se oponen a la gigantesca mina de plata Escobal, a 80 km al sureste de Ciudad de Guatemala, dicen que la minera canadiense Pan American Silver, propietaria de Escobal, envió donaciones de alimentos a las aldeas cercanas a principios de mayo al tiempo que reunía los números de identidad de los beneficiarios y repartía cuestionarios sobre la mina.

Escobal fue cerrada en 2017 después de que la Corte Suprema de Guatemala descubriera que los xinka no habían sido consultados de conformidad con las normas internacionales. Pan American Silver, que compró la mina el año pasado a Tahoe Resources, llegó a un arreglo en un caso presentado por víctimas de un tiroteo en 2013 contra manifestantes en la entrada de la mina y acordó celebrar consultas.

Contactada por correo electrónico, Siren Fisekci, vicepresidenta de relaciones con inversionistas de Pan American Silver, respondió que la empresa donó provisiones “sin condiciones” a todas sus comunidades locales, y no reunió información. Los críticos de la mina insisten en que la empresa está siendo manipuladora. Luis Fernando García Monroy, un líder xinka de la aldea de Casillas que participa en la oposición a la mina, dice: “El Covid ha creado una situación muy delicada para nosotros”.

Maniobras de los gobiernos

La búsqueda de proyectos y políticas controvertidos por parte de los gobiernos en medio de la pandemia también ha suscitado críticas.

En Bolivia, la presidenta interina, Jeanine Áñez, está bajo ataque por promover una gran expansión de la agricultura transgénica con el cuestionable argumento de que se necesitan más cultivos modificados genéticamente para salvaguardar el suministro

interno de alimentos frente al Covid-19. (Véase “Citando la pandemia, Bolivia planea uso más amplio de OGM” en este número). En Brasil, los ecologistas están pidiendo la destitución del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, tras la divulgación este mes de un video que lo muestra instando a que el gabinete retroceda en la conservación mientras la atención pública está enfocada en la pandemia. (Véase “Indignación en Brasil por retrocesos en protección forestal” en este número).

Y en Colombia, el gobierno provocó una impugnación ante los tribunales cuando intentó realizar una consulta pública virtual este mes sobre un asunto altamente polémico: reanudar la fumigación aérea de glifosato para erradicar los cultivos de coca. Liliana Ávila, de la no lucrativa Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), cita la falta de protocolos para tales consultas, que señala ella serían inaccesibles para muchas comunidades rurales e indígenas debido a su limitado acceso a Internet.

En el departamento de Nariño, donde se llevaría a cabo la fumigación, los agricultores abrieron juicio y en mayo obtuvieron una orden judicial de un tribunal de Nariño para detener la consulta. “Esta es una cuestión que merece un debate público adecuado”, dice Ávila. “En este contexto, eso no es posible”.

Si hay un lado positivo, dicen los expertos, es que la crisis del Covid-19 brinda una excelente oportunidad para exponer a los donantes y gobiernos que las políticas ambientales y las de salud pública deben alinearse mejor entre sí.

“La conexión entre agua, salud, producción de alimentos y resiliencia al cambio climático parece muy obvia hoy”, dice Claudia Vásquez, directora para Colombia y Ecuador en The Nature Conservancy. “Hemos estado tratando de mostrar estos vínculos durante muchos años. Ahora que enfrentamos problemas terribles en todas partes, se ha vuelto más claro para nuestras contrapartes”.

—Victoria Burnett

Contactos

Liliana Ávila

Abogada principal
Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente
Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (Aida)
Bogotá, Colombia
Tel: +(571) 926-1322
aida@aida-americas.org

Luis Fernando García Monroy

Miembro
Parlamento Xinka de Guatemala
Cuilapa, Guatemala
Tel: +(502) 3106-7101

Jean Paul Geoffroy
Director de Campañas
Operación Milagro
Sea Shepherd
Conservation Society
Tel: (818) 736-8357
info@seashepherd.org

Jeremy Radachowsky
Director
Programa Mesoamérica y
Caribe Occidental
Wildlife Conservation Society
Nueva York, Nueva York
Tel: (203) 240-2204
jradachowsky@wcs.org

Ian Thompson
Director para Brasil
The Nature Conservancy
São Paulo, Brasil
Tel: +(55 11) 3514-5501
brazil@tnc.org

Claudia Vásquez
Directora para Colombia
y Ecuador
The Nature Conservancy
Bogotá, Colombia
Tel: +(571) 606-5837
colombia@tnc.org

Expertos observan con cautela regreso de monarcas a áreas de reproducción

México

Los amantes de la naturaleza que esperan la reaparición de la mariposa monarca en los climas del norte han tenido que estar particularmente atentos este año.

Las altas temperaturas durante la migración otoñal de la monarca a México, y una reducción inducida por la sequía en la cantidad de néctar disponible en el camino, redujeron a la mitad la población invernal de los insectos, lo que los pone dentro del rango de colapso potencial, dicen los expertos.



Las monarcas que pasaron el invierno de 2019-20 en los bosques del abeto oyamel (*Abies religiosa*) del centro de México ocuparon alrededor de 2.8 hectáreas, en comparación con las seis hectáreas del invierno anterior, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Los científicos estiman que cuando la mariposa (*Danaus plexippus*) cubre al menos seis hectáreas —y cada hectárea puede alojar entre 10 millones y 50 millones de monarcas adheridas a los árboles— su población no está en peligro inmediato de colapso.

Orley “Chip” Taylor, quien dirige el grupo conservacionista sin fines de lucro Monarch Watch, dice que los avistamientos de monarcas que regresan esta primavera indican que la migración está yendo “razonablemente bien”, pero los expertos advierten que el viaje de primavera es sólo una pequeña parte del complejo ciclo de la mariposa. Taylor considera que la combinación de calor —que el año pasado retrasó el paso de la monarca hacia el sur— y sequía diezmoó a la población. “Es la primera vez que hemos tenido una migración tardía y una sequía en el mismo año”, dice Taylor, profesor emérito de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Kansas. “Lo que quizás sea sorprendente es la magnitud de la pérdida”.

Pero Jorge Rickards, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza en México, dice que los números no son motivo de alarma. “No estamos contentos, pero no fue anormal”, dice. “La verdadera sorpresa fue el año anterior”, agrega, refiriéndose a la población hibernante relativamente sólida de 2018-19.

El Fondo Mundial para la Naturaleza lleva cuenta anualmente de la población invernal de las monarcas orientales, el más grande de los dos grupos principales de monarcas en América del Norte. Las monarcas orientales se reproducen en las Grandes Llanuras y en Canadá e hibernan en el centro de México. Una población mucho más pequeña de monarcas occidentales, que se reproduce al oeste de las Montañas Rocosas e hiberna en el sur de California, también se ha reducido, de más de cuatro millones en la década de 1980 a unas 29,000 en 2019.

Los científicos que rastrean monarcas orientales todo el año creen que las mariposas que se dirigían al sur a fines del verano de 2019 se quedaron en Iowa y Nebraska porque el clima era demasiado cálido. Al igual que otras mariposas, las monarcas se sobrecalientan fácilmente, dice Taylor, por lo que se refugian en lugares frescos como los lechos de los ríos en lugar de seguir volando. Como resultado, señala, llegaron unas dos semanas tarde a Lawrence, Kansas, donde él se encuentra, a fines de septiembre. El marcaje ha mostrado que las monarcas que abandonan los Estados Unidos al final de la temporada tienen pocas posibilidades de llegar a México.

Déficit de néctar

Según los expertos, las monarcas continuaron hacia el sur y encontraron menos néctar del que necesitaban en Oklahoma y Texas. La escasez de néctar en la ruta hacia el sur significó que algunas mariposas no llegarían a México y que las que sí llegarían podrían no tener suficientes reservas para el invierno. Tierra Curry, científica del Centro para la Diversidad Biológica en Portland, Oregón, señala que los problemas habían comenzado para las monarcas el año pasado, incluso cuando se preparaban para volar al norte a pasar el verano. Las temperaturas fueron altas en México durante el invierno de 2018-19, por lo que en lugar de apiñarse en los troncos de los árboles en el frío y descansar, como suelen hacer, las mariposas revoloteaban, consumiendo con ello gran parte de sus lípidos.

Las mariposas se marcharon antes de lo habitual y volaron hacia el norte demasiado rápido, llegando a Nebraska y Oklahoma antes de que el algodoncillo floreciera, dice Curry. Las hembras, que ponen huevos sólo en el algodoncillo, tuvieron que agruparse en pocas plantas, lo que significó que hubo menos comida disponible para las orugas de incubación. Poner huevos más al norte también significaba temperaturas más frías, por lo que la nueva generación de monarcas maduró más lentamente y probablemente tenía más edad a la hora de la primera reproducción, lo cual disminuye el crecimiento de la población.

Los expertos advierten que, si bien el clima influye en el número de monarcas, la única forma de construir una población resiliente es restaurar el hábitat del algodoncillo y frenar el calentamiento global. El hábitat del algodoncillo ha sido devastado por el aumento de la fumigación de herbicidas conjuntamente con cultivos de soja y maíz modificados genéticamente para tolerar productos químicos.

Restauración del algodoncillo

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos lanzó en 2014 un programa para restaurar el hábitat del algodoncillo a lo largo de carreteras, ferrocarriles y líneas eléctricas. A mayo de 2019, el programa había agregado 728,000 hectáreas de hábitat “acrecentando el algodoncillo y las plantas de néctar”, dice el Servicio. El Servicio decidirá este año si incluye a las monarcas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos. (En México, las normas estipulan que la monarca necesita “protección especial”). Una designación como especie en peligro traería fondos anuales para la conservación y un plan de recuperación.

En los últimos dos años, sólo 0.4 hectáreas han sido deforestadas en el núcleo de 13,500 hectáreas del área de descanso invernal de las monarcas en los estados de Michoacán y México, dice Rickards. Aun así, existen riesgos: a mediados de mayo, un incendio forestal en la zona de amortiguamiento que linda con uno de los sitios de descanso de la monarca en Michoacán destruyó más de 100 hectáreas de bosque antes de que cientos de bomberos y voluntarios lo apagaran. El año pasado se avistaron monarcas reuniéndose en los árboles de ese bosque, lo que suscitó llamadas para que el área fuera declarada zona protegida. En los últimos años, productores locales de aguacate ansiosos por expandir sus cultivos han practicado deforestación en esa área.

Rickards dice que se necesitan iniciativas en ambos lados de la frontera. “Hay muchas acciones que podemos tomar para ayudar a las monarcas a mantenerse resilientes”, apunta, señalando esfuerzos para cultivar flores de néctar en México y para controlar la tala en el hábitat invernal de las mariposas.

Taylor argumenta que la restauración del algodoncillo estadounidense es probablemente el factor más importante en la supervivencia de la monarca. Sin embargo, señala que los pastizales de los Estados Unidos y Canadá han sido convertidos a la agricultura industrial y el desarrollo urbano al ritmo de unas 800,000 hectáreas al año. Dice Taylor: “No estamos yendo al paso”.

Para Curry, ahora el cambio climático eclipsa el problema de la disminución del hábitat, ya que está amplificando los extremos del tiempo, incluso en los bosques de las tierras altas donde hibernan las monarcas. “Si no mantenemos bajo control el cambio climático, todavía podemos perder a las monarcas”, dice.

—Victoria Burnett

Contactos

Tierra Curry

Científica sénior
Oficina de Portland, Oregón
Center for Biological Diversity
Portland, Oregón
Tel: (928) 522-3681
tcurry@biologicaldiversity.org
www.biologicaldiversity.org

Jorge Rickards

Director general
WWF México
Ciudad de México, México
Tel: +(521 55) 5286-5631
jarickards@wwfmex.org

Orley “Chip” Taylor

Director de Monarch Watch
y profesor
Universidad de Kansas
Lawrence, Kansas
Tel: (785) 864-4051
chip@ku.edu
www.monarchwatch.org/

Documentos & recursos

Área forestal mexicana ocupada por monarcas en 2019-20:
<https://bit.ly/2xqIJvy>

Informe Regional:

Chile, primera nación americana en actualizar compromiso de París

El mes pasado, Chile se convirtió en el primer país de América en presentar la actualización de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) —una declaración

formal de los planes de un país para refrenar sus emisiones de gases de efecto invernadero— según lo estipula el Acuerdo Climático de París.

Las naciones firmantes del Acuerdo de París deben emitir una NDC actualizada cada cinco años conforme a este acuerdo, que fue adoptado en 2015 con el objetivo de mantener el aumento promedio de la temperatura global “muy por debajo” de dos grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Aunque las metas son establecidas por cada país, se espera que se ajusten progresivamente con el tiempo.

En su NDC de 51 páginas, Chile pronostica que alcanzará su pico de emisiones de gases de efecto invernadero en 2025, dos años antes de lo estimado en la versión inicial del plan, elaborada en 2015. Luego, dice, sus emisiones disminuirán en etapas hasta alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Reconociendo que sus emisiones de gases de efecto invernadero han crecido un 115% desde 1990 y un 20% desde 2007, Chile se compromete en su plan a reducir las un 30% por debajo de los niveles actuales para 2030. Entre los pasos que dice que tomará para ello están crear al menos 20 zonas de humedales costeros protegidos para 2025 y restaurar 200,000 hectáreas de bosque nativo para 2030.

La Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), una agrupación de más de 100 organizaciones chilenas de incidencia, emitió una declaración el 9 de abril criticando la NDC de Chile por “falta de ambición”. Dijo la SCAC: “Lo positivo es que Chile no utilizó la excusa de la pandemia del coronavirus para evadir sus compromisos internacionales. Pero no está claro cómo se pueden cumplir los objetivos, por ejemplo, al tiempo que se insiste en que las centrales eléctricas a carbón que hoy suministran aproximadamente el 40% de la electricidad del país no se cerrarán hasta 2040”.

Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, cuestiona el compromiso de reforestar con especies nativas, señalando la propagación de especies de árboles exóticos en el país.

Isabella Villanueva, presidenta del grupo ecologista CEUS, compuesto por profesionales treintañeros y estudiantes, dijo que los grupos de la sociedad civil presionarán por el cierre de las centrales a carbón para 2030.

Seguimiento: Estefanía González, coordinadora de Campañas, Greenpeace Chile, Santiago, Chile, +(562) 2634-2120, estefania.gonzalez@greenpeace.org. Isabella Villanueva, presidenta, CEUS Chile, Santiago, Chile, +(569) 7426-4079, ivillanueva@ceuschile.cl. NDC de Chile: <https://bit.ly/2X9nveS>.



Bolivia es vista como conducto de mercurio para mineros en Perú

Bolivia se ha convertido en el segundo mayor importador mundial de mercurio detrás de la India, una tendencia, dicen los expertos, que probablemente refleja el papel del país como un conducto de este metal pesado tóxico hacia mineros de oro ilegales en la selva tropical peruana.

El hallazgo surgió en una investigación realizada en ocho países por la filial neerlandesa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red conservacionista con sede en Suiza. Utilizado comúnmente por los mineros a pequeña escala para separar el oro del mineral, se ha encontrado que el mercurio contamina los



rios de la región amazónica y se bioacumula en los peces, representando así un riesgo para la salud de las comunidades de la selva tropical que dependen en parte de la pesca.

Las cooperativas mineras artesanales de Bolivia también usan mercurio. Pero las enormes importaciones del metal al país en los últimos cinco años sugieren que gran parte de este continúa su camino como contrabando a Perú, donde las importaciones de mercurio en el mismo período han estado sujetas a límites.

“En Bolivia, las regulaciones sobre la importación de mercurio no son más estrictas que para las mercancías comunes”, dice Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), organización sin fines de lucro que realizó investigaciones en Bolivia para el estudio. “El gran salto en las importaciones se produjo desde 2015, cuando Perú impuso restricciones a los envíos de mercurio al país. Ese año se permitieron [en Bolivia] importaciones de 152 toneladas, 12 veces la cantidad de 2014. Y desde entonces, las importaciones se han mantenido en ese rango, aunque no se han publicado cifras oficiales”.

Agrega Campanini: “La hipótesis más sólida es que gran parte del mercurio importado por Bolivia, la mayor parte del cual proviene de México, se envía como contrabando a Perú por una frontera que es larga y porosa en lo que toca al contrabando”.

Bolivia y Perú son partes en la Convención de Minamata, un tratado de control de mercurio que entró en vigencia en 2017. Esta convención estipula que los países signatarios donde se practica minería artesanal y en pequeña escala “adoptarán medidas para reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio”.

En el momento de la implementación del tratado, Perú ya había estado aplicando restricciones a la importación de mercurio durante tres años. Según los términos del acuerdo, este año Bolivia debería estar implementando un plan de acción nacional para eliminar el mercurio, pero no ha terminado de redactar ese plan. En marzo, el viceministro de ambiente dijo que se había reunido en La Paz con expertos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) para trabajar en el plan.

En Bolivia, casi toda la extracción de oro la llevan a cabo 150,000 mineros de pequeña escala que trabajan en cooperativas reconocidas por el gobierno. Según cifras gubernamentales, en 2018 estos mineros produjeron 30 toneladas de oro, que se vendieron en el extranjero por un valor de US\$1.16 mil millones. Hasta 2014, las exportaciones bolivianas de oro no habían superado los \$300 millones anuales, pero los expertos dicen que las importaciones de mercurio en los últimos cinco años son mucho más grandes de lo que se necesitaría sólo para el aumento de la producción local.

Seguimiento: Óscar Campanini, director, Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Cochabamba, Bolivia, +(591 4) 425-2401, oscarcampanini@gmail.com. Para el informe de la UICN sobre las importaciones de mercurio, “Abriendo la caja negra: Datos locales sobre comercio global de mercurio formal e informal” (en inglés): <https://bit.ly/3djk0IA>.



Militares brasileños convocados para combatir deforestación

Con su organismo de fiscalización ambiental mermado por recortes presupuestarios, Brasil ha puesto a los militares a cargo de combatir el repunte de la deforestación en la Amazonia.

La medida se produce en medio de estimaciones de que la deforestación en la Amazonia brasileña fue un 64% mayor el mes pasado que en abril de 2019, y un 55% mayor en los primeros cuatro meses de 2020 en comparación con el mismo período en 2019.

En un decreto emitido el 6 de mayo, el presidente Jair Bolsonaro ordenó a las Fuerzas Armadas coordinar las operaciones para frenar la tala de árboles, los incendios deliberados y otras formas de destrucción por parte de madereros ilegales, usurpadores de tierras, mineros ilegales y otros. Las áreas seleccionadas para las acciones de control son parques y bosques nacionales y estatales, reservas indígenas y bosques públicos no designados para protección.

El decreto, con pocos detalles, dijo que la medida, llamada “Operación Verde Brasil 2”, duraría del 11 de mayo al 9 de junio, pero podría extenderse. Este período marca el comienzo de la estación seca de seis meses en la Amazonia, cuando la falta de lluvia facilita el desmonte y la quema de tierras.

El 11 de mayo, el vicepresidente Hamilton Mourão anunció que la campaña de control se extendería hasta enero de 2022, cuando Bolsonaro deje el cargo. Mourão encabeza el Consejo Nacional de la Amazonia, un grupo ministerial de 14 miembros creado por Bolsonaro en febrero para coordinar la protección y el desarrollo de la región amazónica.

Las autoridades dijeron que la operación sería ejecutada por 3,800 efectivos, principalmente del Ejército. Además, 400 agentes provendrían del Ibama, el órgano de fiscalización ambiental del Ministerio del Medio Ambiente; del ICMBio, la unidad del ministerio que supervisa las áreas protegidas federales, y de una variedad de organismos estatales.

Mourão dijo que se necesitaba personal militar para compensar la escasez de empleados del Ibama y el ICMBio debido a que estos organismos carecen de presupuesto para reemplazar a los agentes de campo que se retiran. Las autoridades dijeron que el presupuesto para el primer mes de la operación es de R\$60 millones (US\$10.2 millones). Aunque no es grande, es casi equivalente al presupuesto de fiscalización del Ibama, R\$75 millones (US\$12.8 millones) para 2020. Ibama tenía sólo 750 agentes de campo en 2019, en comparación con los 1,300 que tenía en 2010.

Los organizadores de la operación están promocionando el compromiso del numeroso personal militar y la extensión recientemente anunciada de la campaña hasta enero de 2022 como prueba de que el gobierno está genuinamente preocupado por la conservación de los bosques. Al gobierno todavía le escuecen las críticas mundiales de que parece faltarle el sentido de urgencia ante los graves incendios forestales del año pasado y por revertir las protecciones ambientales en nombre del desarrollo. (Véase artículo relacionado en este número.)

“Esta operación no es estacional, sino que durará hasta enero de 2022, el fin del gobierno de Bolsonaro, porque este problema seguirá existiendo”, dijo Mourão. “La operación es necesaria para mostrar al resto del mundo que Brasil no es un villano del medio ambiente. Eso no es lo que somos”.

Los grupos ecologistas, por su parte, cuestionan la decisión de que los militares coordinen la operación, aunque tal medida no es sorprendente por parte de Bolsonaro. Ex

capitán y paracaidista del Ejército, ha nombrado a numerosos oficiales militares en actividad y en retiro como ministros del gobierno desde que asumió el cargo en enero de 2019. Este año, aumentó a ocho el número de militares en su gabinete de 20 miembros, sin incluir al vicepresidente Mourão, que es general en retiro.

“Tiene sentido que las fuerzas armadas de Brasil participen en la lucha contra un repunte en la deforestación de la Amazonia, pero sólo para apoyar una operación coordinada por organismos ambientales federales y estatales, los que tienen los conocimientos técnicos sobre cómo y dónde organizar tal esfuerzo”, dice Suely Araújo, quien dirigió el Ibama de junio de 2017 a enero de 2019.

Araújo, ahora analista privada de políticas públicas, agrega: “Este esfuerzo militarizado nunca puede reemplazar un enfoque más sistemático e impulsado por inteligencia para la aplicación de los controles ambientales. Y si bien es probable que aplaque temporalmente la deforestación ilegal y los incendios en áreas específicas, cuando los militares se retiren los infractores volverán a esas zonas, lo que hará que aumente nuevamente, o se irán a otras zonas más remotas”.

Seguimiento: Suely Araújo, ex presidenta, Ibama, Brasília, Brasil, +(55 61) 3248-3163, suelymvg@gmail.com. El decreto de Bolsonaro está disponible en portugués en: <https://bit.ly/2yOmfEN>.



En medio de confinamiento, elefanta de zoológico viaja a nuevo santuario

Mara, una elefanta asiática de 54 años y 3.5 toneladas que había vivido en cautiverio en el zoológico de Buenos Aires, Argentina, llegó este mes a su más espaciosa casa de retiro, un santuario de elefantes en Brasil, el primero de su tipo en América Latina.

El 11 de mayo, Mara, que nació en la India y pasó casi toda su vida en cautiverio — primero en circos en Montevideo, Uruguay y Buenos Aires, luego en el zoológico de Buenos Aires—, llegó al Santuario de Elefantes Brasil. Esta reserva natural, privada y no lucrativa en el estado occidental de Mato Grosso, fue creada para ayudar a elefantes anteriormente cautivos a vivir con una mejor calidad de vida. (Véase “Santuario brasileño da a elefantes espacio para vagar” —EcoAméricas, marzo 2020.)

Mara había pasado 25 años confinada en un complejo de 1,200 metros cuadrados (13,000 pies cuadrados) en el zoológico de Buenos Aires, que ahora está siendo demolido para dar lugar al Ecoparque Buenos Aires, un área natural de 17 hectáreas que se espera esté concluido en 2023.

Se habían hecho planes para transportar a Mara en el traslado de cinco días y 2,700 km al santuario a fines de marzo. Pero el viaje se retrasó debido a la crisis del Covid-19.

Scott Blais, presidente del Santuario de Elefantes Brasil, dice que cuando se realizó el viaje, los funcionarios argentinos y brasileños permitieron un cruce fronterizo relativamente rápido porque, como lo expresó: “Todos pusieron a Mara primero”.

Seguimiento: Scott Blais, presidente, Santuario de Elefantes Brasil, Chapada de Guimarães, Mato Grosso, Brasil, scott@globalelephants.org.

Indignación en Brasil por retrocesos en protección forestal

Brasil

Durante semanas, los ambientalistas brasileños han acusado al gobierno del presidente Jair Bolsonaro de acelerar su desmantelamiento de las protecciones a los recursos naturales con la esperanza de que los retrocesos pasen inadvertidos en medio del avance dramático del Covid-19. Como evidencia, han citado dos acciones tomadas en abril, después de que los contagios y muertes por el Covid-19 en Brasil comenzaran su fuerte ascenso hacia los 418,608 y 25,935 registrados, respectivamente, al 28 de mayo.

Una acción concede de hecho la amnistía a los propietarios de tierras que deforestaron ilegalmente áreas protegidas de la Mata Atlántica antes del 22 de julio de 2008. La otra promete títulos de propiedad a los colonos que puedan probar que han ocupado un territorio reclamado por comunidades indígenas y que está siendo demarcado para estas.

Ahora los críticos apuntan a un tercer suceso: la divulgación de un video en el que el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, parece confirmar sus peores sospechas. “Necesitamos hacer un esfuerzo mientras estamos en este momento de calma en términos de cobertura de prensa, cuando sólo están hablando del Covid, para avanzar y cambiar todas las reglas y simplificar las normas”, dice Salles en el video, grabado durante una reunión de Bolsonaro y su gabinete el 22 de abril. “Ahora es el momento de unir fuerzas para acelerar la simplificación... No necesitamos el Congreso, porque las cosas que necesitamos del Congreso, con el desorden que existe, no las va a aprobar”.

Exención en cuestión

La divulgación del video ocurrió el 22 de mayo en relación con un asunto diferente: una investigación del reemplazo del jefe de la Policía Federal por parte de Bolsonaro. Pero en el video, Salles aparece instando a una acción reguladora en medio de la crisis del Covid-19. Cita la medida sobre la Mata Atlántica como el tipo de acción necesario durante la pandemia. Esa orden del 6 de abril, emitida por él, efectivamente permite a los propietarios de tierras de esa región calificar conforme al Código Forestal de 2012 para una exención de multas por la deforestación ilegal de las llamadas áreas protegidas permanentes (APP) antes del 22 de julio de 2008. Las APP generalmente abarcan colinas, laderas, riberas de ríos y cabeceras.

Los críticos dicen que tales exenciones acelerarían la destrucción de la Mata Atlántica, un bosque tropical otrora vasto que se extiende en forma fragmentada por 17 estados en gran parte costeros y que ahora tiene sólo el 12% de su tamaño en el momento del asentamiento europeo. El 6 de mayo, la fiscalía federal en Brasilia se sumó a una organización ambientalista sin fines de lucro y a una asociación de fiscales ambientales en una demanda judicial que sostiene que la orden de Salles viola una ley de protección de 2006 de la Mata Atlántica que no ofrece tales exenciones. El opositor Partido de los Trabajadores ha abierto una demanda judicial por motivos similares, solicitando al juez que dictamine que Salles actuó ilegalmente y que lo castigue por irregularidades administrativas.

Los críticos consideran que las acciones de Salles son perjudiciales y engañosas. El grupo ambientalista WWF Brasil acusó a Salles de actuar “contra los intereses



nacionales, en sordina”. Mientras tanto, el Observatorio del Clima, una red sin fines de lucro que monitorea las emisiones de carbono de Brasil, pidió al Supremo Tribunal y al Congreso que “tomen medidas para remover inmediatamente a Salles de su cargo por conspirar dolosamente contra [lo que deberían ser] sus propios deberes administrativos”.

También es controvertida la medida que beneficia a los colonos de tierras reclamadas por las comunidades indígenas. La orden del 16 de abril de la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai) ofrece a los colonos el título de propiedad de esas áreas si pueden demostrar que la han ocupado, por ejemplo, demostrando que han construido viviendas. Una vez que obtienen el título, pueden explotar la tierra comercialmente o venderla. La orden de la Funai es un duro golpe para los habitantes indígenas de 237 áreas reclamadas como tierras ancestrales. Algunos han esperado desde 1982 a que Funai demarque su territorio como reserva indígena, al tiempo que enfrentan incursiones de madereros ilegales, mineros y usurpadores de tierras.

Función de las reservas

Es mucho lo que está en juego para el medio ambiente. Los expertos dicen que las reservas indígenas con reconocimiento federal, que ocupan el 13.8% del país y el 25% de la Amazonia brasileña, son un baluarte clave contra la deforestación. Pero el presidente Bolsonaro las ha retratado como obstáculos para el crecimiento económico. Como candidato, prometió que “no demarcaría un centímetro más de tierra” para las reservas indígenas. En febrero, envió al Congreso un proyecto de ley que permitiría la minería, la perforación petrolera y gasífera y la construcción de represas en tierras indígenas, incluso en las que ya están demarcadas. (Véase “Brasil busca permitir minería, represas y extracción de hidrocarburos en tierras indígenas” —EcoAméricas, febrero 2020.)

La orden de la Funai ha generado una amplia oposición. En abril, fiscales federales de 23 de los 27 estados de Brasil instaron a la Funai a anularla por motivos constitucionales. Dijeron que la medida “crea inseguridad jurídica que aumentará seriamente los riesgos de conflictos por los derechos a la tierra y la degradación ambiental”. Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), el principal grupo de derechos indígenas de Brasil, dice: “La Constitución garantiza a los pueblos indígenas el uso exclusivo del territorio que tradicionalmente ocuparon, tierras que no pueden ser privatizadas. La carta magna nacional, al definir las tierras indígenas, no distingue entre las que han sido demarcadas y las que están en proceso de demarcación. La norma de la Funai es claramente inconstitucional”.

—Michael Kepp

Contactos

Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira

Secretario ejecutivo
Consejo Indigenista
Misionero (Cimi)

Brasília, Brasil
Tel: +(55 61) 2106-1650
secretario@cimi.org.br

João de Deus Medeiros
Coordinador general
Red Mata Atlántica (RMA)
Florianópolis, Santa Catarina
Brasil
Tel: +(55 48) 3238-6696
jdeusmedeiros@gmail.com

Alexandre Gaio
Fiscal
Fiscalía Federal
Curitiba, Paraná, Brasil
Tel: +(55 41) 3250-4766
alexandregai@mppr.mp.br

Cristina Leme Lopes
Abogada y analista de políticas
Climate Policy Initiative (CPI)
Rio de Janeiro, Brasil
Tel: +(55 21) 3527-2520
cristina.leme@cpirio.org

Mario Mantovani
Director de Políticas Públicas
Fundación SOS Mata Atlántica
São Paulo, Brasil
Tel: +(55 11) 3262-4088
mario@sosma.org.br

Represa es implicada en colapso de cascada y derrame de petróleo

Ecuador

Primero, la cascada más grande de Ecuador se desvaneció. El 2 de febrero de este año, la erosión en el río Coca en la región amazónica del país creó un enorme sumidero, borrando en gran medida la preciada cascada de San Rafael, de 150 metros de altura.

Luego, el 7 de abril, la erosión 1.5 km aguas arriba abrió otro sumidero y fracturó tres oleoductos, incluidos los dos conductos principales de crudo ecuatoriano desde los

cabezales en la cuenca amazónica hasta las terminales en la costa del Pacífico. En uno de los peores derrames de petróleo en la región amazónica en décadas, se escaparon más de 15,000 barriles (630,000 galones) de crudo, causando una severa contaminación aguas abajo en las comunidades ribereñas de los ríos Coca y Napo.

Expertos en Ecuador y el extranjero sugieren que los dos eventos están relacionados con un fenómeno conocido como aguas hambrientas, por el cual los ríos se vuelven más erosivos después de perder sedimento en el agua. Dicen que la causa en este caso podría ser provocada por el hombre, a saber, Coca Codo Sinclair, un complejo hidroeléctrico de 1,500 megavatios financiado por China sobre el río Coca que se inauguró en medio de gran fanfarria en 2016. Coca Codo Sinclair fue controvertido desde el principio, en parte debido a su ubicación en una zona de falla geológica cerca de Reventador, uno de los volcanes más activos de Ecuador. Los expertos también advirtieron que podría alterar la dinámica fluvial del Coca, un proceso que algunos ven como un factor en las rupturas de los oleoductos y la desaparición de la cascada de San Rafael.

Represa de captación en el candelero

El foco de esta preocupación es la represa de captación del complejo, 17.5 km aguas arriba del sitio de la ruptura de los oleoductos. La represa desvía parte del caudal del Coca a un túnel de casi 25 km que circunvala una gran curva del río a medida que entrega agua al reservorio aguas abajo y a la central hidroeléctrica.

Los críticos argumentan que una vez que la represa obliga efectivamente al río a desprenderse de una parte de su carga de sedimentos, lo cual en gran medida ralentiza su caudal, el agua más clara liberada en el canal natural del río debajo de la represa se comporta de manera diferente. Sin carga de material suspendido, esta agua “hambrienta de sedimentos”, dicen los expertos, puede poseer una capacidad erosiva mucho mayor, afectando poderosamente la geomorfología del río. De hecho, un estudio reciente de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador estima que la represa de captación aumentó la tasa de erosión del río en un 42%. El estudio dice que la erosión remontante, o aguas arriba, en el río Coca podría estar relacionada con que la represa esté “produciendo el fenómeno de agua hambrienta”.

Emilio Cobo, coordinador del programa de agua en América del Sur en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), coincide en que la disminución de la carga de sedimentos es clave. “Las alteraciones que esta [represa de captación] ha causado a la dinámica fluvial se traducen principalmente en una pérdida de caudal [e] interrupción de la carga de sedimento natural”, dice Cobo. “La represa actúa como una barrera”.

Coca Codo Sinclair se inauguró en noviembre de 2016 en un evento de exhibición en el que participaron Rafael Correa, presidente de Ecuador en ese momento, y el presidente chino Xi Jinping. Ahora, el complejo está siendo criticado como una amenaza para los recursos naturales y construidos. Dichas críticas, avivadas por el colapso de la cascada de San Rafael, se intensificaron después de la ruptura de tres oleoductos: el estatal Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el privado OCP Ecuador, que transportan crudo, y una línea de productos derivados del petróleo.

Impactos aguas abajo

El derrame afectó a 105 comunidades de los ríos Coca y Napo donde viven 135,000 personas, dice la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia ecuatoriana (Confeniae), una gran asociación de grupos indígenas. Hubo informes de que después de verterse del Coca al Napo, los contaminantes pueden haber llegado a Perú. “No se observó una mancha desplazándose en Perú, pero las comunidades [allá] están hablando sobre el olor del agua, los cambios en las condiciones morfológicas del río y la disminución de las poblaciones de peces”, dice la abogada María Espinosa de Amazon Frontlines, una organización estadounidense sin fines de lucro que trabaja para apoyar los derechos indígenas.

Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana (Fcunae), una asociación de más de 100 comunidades quechuas, dice que el derrame contaminó “el río y los peces, [y] los animales que viven cerca, como las guantas [Cuniculus paca]”.

La geóloga y especialista en ríos Isabel Carolina Bernal, profesora de la Escuela Politécnica Nacional, advierte que la erosión remontante seguirá causando estragos en el Coca. Ella y otros expertos creen que el fenómeno plantea riesgos a mediano plazo para la infraestructura, incluida la represa de captación y una parte de la carretera que une la capital de Ecuador, Quito, con la región petrolífera del país, Lago Agrio.

Bernal recomienda una investigación para comprender mejor los efectos de la represa en el río. Cobo insta al análisis de la revisión ambiental y la toma de decisiones que condujeron a la construcción de la represa. Mientras tanto, grupos de incidencia están pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que monitoree la respuesta del gobierno al colapso de los oleoductos. Y el 16 de mayo, la Corte Constitucional de Ecuador comenzó a escuchar una solicitud de las comunidades indígenas para que se ordene a las entidades responsables de los oleoductos reparar el daño del derrame de abril y tomar medidas para prevenir futuros accidentes.

—Mercedes Álvaro

Contactos

Isabel Carolina Bernal

Escuela Politécnica Nacional
Quito, Ecuador
Tel: +(59 32) 297-6300
isabel.bernal@epn.edu.ec

Emilio Cobo

Coordinador del Programa de Agua
para América del Sur
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
Quito, Ecuador
Tel: +(59 32) 333-0684

emilio.cobo@iucn.org

María Espinosa

Abogada de derechos humanos

Amazon Frontlines

Quito, Ecuador

Tel: +(59398) 633-8495

maria@amazonfrontlines.org

Carlos Jipa

Presidente

Federación de Comunas Unión de
Nativos de la Amazonia Ecuatoriana (Fcunae)

Sucumbíos, Ecuador

Tel: +(59 39) 8276-2618

fecunae.1984@yahoo.com

Andrés Tapia

Portavoz

Confederación de Nacionalidades

Indígenas de la Amazonia

Ecuatoriana (Confeniae)

Pastaza, Ecuador

Tel: +(59398) 445-5175

comunicacionconfeniae@gmail.com

**Documentos
& recursos**

Resumen del estudio de la Escuela Politécnica Nacional:

<https://bit.ly/3c6GgE6>

Documento de investigación sobre el fenómeno de las “aguas hambrientas”

<https://bit.ly/3d9Cf2O>

Citando la pandemia, Bolivia planea uso más amplio de OGM

Bolivia

El gobierno de Bolivia ha acordado permitir el cultivo comercial más amplio de variedades de especies genéticamente modificadas, argumentando que la producción de



alimentos debe incrementarse en medio de la pandemia del Covid-19. Aunque las potencias agroexportadoras vecinas de Brasil y Argentina producen desde hace años una amplia variedad de cultivos transgénicos, Bolivia hasta ahora sólo ha permitido formalmente el cultivo comercial de uno: la soja Roundup Ready de Monsanto, que está modificada genéticamente para tolerar el herbicida Roundup —de la misma empresa— a base de glifosato.

Un decreto emitido el 7 de mayo por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estipula la aprobación gubernamental rápida de más variedades de soja transgénicas, así como de maíz, caña de azúcar, algodón y trigo alterados genéticamente, el último de los cuales aún no está aprobado para su cultivo comercial en ninguna parte del mundo. El decreto de Áñez, una ex senadora conservadora que fue declarada presidenta interina cuando su predecesor Evo Morales renunció entre acusaciones de fraude electoral el año pasado, se produjo en medio de intenso cabildo por parte de los agronegocios. Ha provocado los ataques de grupos ecologistas, pequeños agricultores y políticos de oposición. Cuestionan el lenguaje del decreto que presenta a los transgénicos como “una prioridad para el abastecimiento del consumo interno”. La verdadera razón de la medida, afirman estos críticos, es que los agronegocios bolivianos quieren aumentar sus ventas en el extranjero.

Citan competencia

Los productores reconocen que la preocupación por su competitividad en los mercados mundiales motiva en gran medida su apoyo a una política más complaciente. “Los productores hemos insistido durante más de una década en que queremos competir en igualdad de condiciones con otros países”, dice Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). “Sólo en Argentina hay 61 OGM [variedades de plantas con alteraciones genéticas] aprobados. En los últimos cuatro años, hemos tenido grandes pérdidas debido a sequías que hubiéramos podido manejar mucho mejor con la biotecnología”.

Pantoja, que cultiva soja y otros cultivos en 3,500 hectáreas en el departamento oriental de Santa Cruz, estima que las variedades transgénicas aumentarían la producción anual de granos de Bolivia de su nivel actual de 4.5 millones de toneladas a 12 millones de toneladas.

“Bolivia tiene un grave problema de productividad”, dice José Luis Llanos, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB). Cita cifras gubernamentales que muestran que el rendimiento de maíz por hectárea en Bolivia es de 2.34 toneladas métricas en comparación con seis toneladas en Brasil y ocho en Argentina. Aunque en 2019 el país tenía 3.8 millones de hectáreas de tierra bajo cultivo, dice Llanos, ese total podría ampliarse a 12 millones de hectáreas al aumentarse la variedad de semillas transgénicas y acrecentarse el uso de sistemas de riego y fertilizantes

Hoy, el cultivo de soja de Bolivia abarca casi por completo la variedad Roundup Ready. La soja ocupa más de un tercio de las tierras de cultivo del país, y el maíz, el segundo cultivo más grande, ocupa el 13%. Aunque el maíz transgénico aún no ha obtenido la aprobación del gobierno, se importa y siembra ilegalmente, y representa aproximadamente un tercio del cultivo total de maíz, según un estudio del CIAB publicado en 2016.

Antes de que Morales dejara el cargo en noviembre pasado bajo presión de las fuerzas armadas, había comenzado a apoyar un mayor uso de cultivos genéticamente modificados

después de criticarlos intensamente en años anteriores. (El cultivo de soja genéticamente modificada había sido aprobado por su predecesor, Carlos Mesa, en 2005). Pero horas después de que Áñez emitiera su decreto del 7 de mayo que autorizaba la aprobación de más cultivos genéticamente modificados, Morales tuiteó desde su exilio en Argentina: “Ahora [el gobierno] nos mata con transgénicos”.

Cuestión de legitimidad

Mesa también manifestó su oposición, diciendo en una entrevista radial el 11 de mayo: “No es aceptable que un gobierno transitorio tome decisiones sobre un tema ambiental de alta complejidad política y sensibilidad social”. El término de este gobierno sigue sin estar claro. Las elecciones presidenciales y legislativas estaban programadas para el 3 de mayo, pero las elecciones se han pospuesto indefinidamente debido a la crisis del Covid-19.

Los grupos de la sociedad civil temen que un giro hacia los transgénicos cause destrucción ambiental generalizada, así como dislocación social. “Bolivia es un país con 36 pueblos indígenas, y ellos serán los más afectados si se expanden los transgénicos”, dice Pamela Cartagena, directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), una organización boliviana sin fines de lucro. “Serán desplazados de sus tierras por los agronegocios, tal como ha ocurrido en otros países”.

Cartagena cita información del censo de 2013 que muestra que el 60% de las tierras de cultivo del país son propiedad de grandes productores, mientras que dos tercios de los alimentos que consumen los bolivianos se cultivan en granjas familiares y comunidades indígenas de pequeña escala de menos de 50 hectáreas. Son esas pequeñas granjas, dice, “las que debemos defender”.

El Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Bocinab), una asociación cuyos miembros recolectan y venden nueces de Brasil, teme que los transgénicos causen la “tala de nuestros bosques y amenacen la actividad económica de la que dependen nuestras familias”.

—Daniel Gutman

Contactos

Pamela Cartagena

Directora general
Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (Cipca)
La Paz, Bolivia
Tel: +(591 2) 291-0797
pcartagena@cipca.org.bo

José Luis Llanos

Presidente
Colegio de Ingenieros

Agrónomos de Bolivia (CIAB)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: +(591 3) 343-4658
jllanos@hotmail.com

Marcelo Pantoja
Presidente
Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: +(591 3) 342-3030
marcelo-e-pantoja@hotmail.com

Pablo Villegas
Investigador
Centro de Documentación e
Información Bolivia (Cedib)
Cochabamba, Bolivia
Tel: +(591 4) 425-2401
pablorone@gmail.com

Artículo central

Río resalta necesidad de limpieza de cuencas

México

Las personas que viven a lo largo del río Grande de Santiago, cerca de Guadalajara, México, están muy familiarizadas con la contaminación crónica que afecta a sus comunidades altamente industrializadas. Sin embargo, de todos modos las sacudió la noticia de que un estudio que documenta las graves consecuencias para la salud local de esa contaminación no se hizo público hasta el pasado enero, no menos de nueve años después de haberse concluido.

“Fue un shock”, dice Alan Carmona, portavoz de Un Salto de Vida, un colectivo de activistas que presionan por la limpieza del río y las comunidades ribereñas. “Fue muy doloroso”.

No es de extrañar, entonces, que el río Santiago se encuentre incluido en un Plan Nacional de Restauración de Cuencas que está llevando a cabo la principal autoridad ambiental del gobierno mexicano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El plan, que debe implementarse entre 2020 y 2024, abarca otras cinco fuentes de agua altamente contaminadas: el río Tula en el estado central de Hidalgo, el sistema de acuíferos Independencia en Guanajuato, el río Zahuapan en Tlaxcala, el río Atoyac en Puebla y varios cursos de agua en el sur y norte de Veracruz. Dos lagos en el

estado de Michoacán, Cuitzeo y Pátzcuaro, también están incluidos en el programa, que busca simultáneamente brindar restauración ecológica y mejorar la salud pública.

Las autoridades dicen que la cuestión de la limpieza y restauración de las cuencas fluviales más contaminadas del país no ha hecho más que fortalecerse con la crisis del Covid-19. El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, se ha referido a estas áreas focalizadas para su limpieza como “infiernos ambientales” cuyos impactos en la salud más el Covid-19 han producido una “doble crisis”. Según la Semarnat, la mayoría de las muertes causadas por el Covid-19 en todo el país hasta principios de mayo han ocurrido en “áreas de gran impacto ambiental” que van desde el río Santiago hasta el río Coatzacoalcos en Veracruz.

Después de reunirse virtualmente este mes para discutir el proyecto con Toledo, otros funcionarios del gobierno y grupos de la sociedad civil, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, María Elena Álvarez-Buylla, dijo: “El compromiso es echar a andar este proyecto con altísima prioridad y darle el presupuesto necesario para atender... esta emergencia que se sobrepone con la nueva emergencia que representa el Covid-19”.

El estudio de 2011 fue realizado por la investigadora Gabriela Domínguez de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en cooperación con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA). Practicó exámenes de exposición a tóxicos en 330 niños y midió los indicadores generales de salud en 219 adultos de El Salto, una comunidad ubicada al sureste de Guadalajara, así como en Juanacatlán y otras cinco comunidades a lo largo del río.

El estudio encontró exposiciones tóxicas elevadas entre los niños, siendo en general más grave el problema cuanto más cerca del río vivían los participantes. Tan sólo en El Salto, por ejemplo, el estudio encontró que el 47% de los niños examinados tenían niveles de plomo en sangre superiores a 5.0 microgramos por decilitro ($\mu\text{g}/\text{dL}$) y que el 6.4% registraron concentraciones de plomo en sangre superiores a 10.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) usan el valor de referencia de 5.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$ para identificar a los niños que requieren manejo de casos porque sus niveles de plomo en sangre son mucho más altos que los de la mayoría de los niños. Los CDC dicen que se ha demostrado que incluso niveles bajos de plomo en sangre afectan el coeficiente intelectual de los niños, su capacidad de prestar atención y su rendimiento académico, efectos, señala, que no se pueden corregir.

Aunque el estudio mexicano calificó el nivel de exposición tóxica como “preocupante”, los padres de los niños afectados no fueron notificados de los hallazgos. “Alguien decidió la vida de los niños, si vivirían o no”, afirma Enrique Enciso de Un Salto de Vida, que ha liderado esfuerzos para llamar la atención del público sobre los hallazgos.

Desde la divulgación del estudio, Un Salto de Vida ha convocado reuniones comunitarias y ha estado en contacto con antiguos sujetos del estudio que informan de problemas de salud actuales casi una década después. El grupo también está compilando un registro comunitario de salud, según su integrante Graciela González.

Una investigación separada realizada por González para una tesis de maestría en 2017 examinó a 66 niños de entre 10 y 12 años que asistían a una escuela primaria ubicada a 300 metros del río Santiago. Dicho estudio planteó preocupaciones sobre problemas



respiratorios relacionados con toxinas ambientales, e informó que el 21% de los niños examinados estaban inhalando oxígeno por debajo del 80% de la capacidad normal.

Múltiples informes atribuyen los problemas del área del río Santiago a los efluentes de aguas residuales municipales, residuos de pesticidas, un viejo vertedero de desechos sólidos y descargas contaminadas aéreas y líquidas de cientos de plantas industriales de propiedad mexicana y extranjera. Cánceres, trastornos dermatológicos, deficiencias cognitivas y enfermedad renal crónica figuran entre los problemas de salud identificados por pobladores e investigadores.

Desde el inicio de la crisis del Covid-19, los expertos han señalado que los pobladores de la región del río Santiago y otros corredores fluviales contaminados, especialmente los ancianos, pueden ser especialmente vulnerables al virus debido a sus perfiles de salud y condiciones de vida. De los 48 adultos de El Salto que participaron en el estudio realizado por Domínguez y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, el 39% mostró obesidad, cuyas afecciones relacionadas se cree que empeoran los efectos del coronavirus que causa el Covid-19. El estudio también encontró hacinamiento (tres o más ocupantes por área de dormir) en el 40% de los hogares participantes, un problema que podría contribuir a la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, incluso sin el Covid-19, El Salto enfrenta ya graves amenazas a la salud ambiental debido en gran parte a sus abundantes focos de contaminación. A lo largo de kilómetros, el paisaje de El Salto está dominado por una vasta cantidad de actividades industriales que van desde el procesamiento químico y de alimentos hasta la fabricación de automóviles y productos electrónicos, actividades que afectan la calidad del aire y la calidad del agua. Y parece haber poca planificación para salvaguardar al público. Por ejemplo, una vivienda relativamente nueva se encuentra cerca de un centro de almacenamiento y distribución de gasolina operado por Pemex, la empresa petrolera nacional, y un ducto de gasolina que sirve a este establecimiento se encuentra bajo una subdivisión residencial. “Creemos que mucho tiene que ver con la dirección de los vientos, porque creemos que la mayoría de los efectos sobre la salud provienen de las emisiones aéreas”, dice González, especialista en salud ambiental.

Cindy McCulligh, investigadora de la Universidad de Zacatecas que ha estudiado el río Santiago, llama al área de El Salto un “corredor industrial de gran magnitud” cuyos problemas de contaminación provienen en gran medida de su producción de bienes para los mercados mundiales. “Nos guste o no, todos estamos consumiendo productos que se hicieron aquí en un momento”, dice McCulligh. Ella observa que las autoridades no toman medidas enérgicas contra la contaminación de la cuenca del Santiago, uno de los sistemas fluviales más importantes de México, atribuyéndola a la “corrupción institucionalizada”.

Respondiendo a fines de enero a la reciente divulgación del estudio de contaminación de 339 páginas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, negó que los hallazgos hayan sido retenidos intencionalmente. Dijo que el informe no se entregó a su equipo cuando su predecesor dejó el cargo en diciembre de 2018, sino que se archivó. Según una declaración del gobierno estatal, el estudio fue obtenido por un ciudadano privado a través de una solicitud de registros públicos presentada a la CEA en diciembre pasado. Luego fue entregado a los medios de comunicación, y finalmente recibió una amplia cobertura. La administración de Alfaro dice que usará el estudio como información de referencia para el trabajo de restauración del río Santiago.

Al incorporar iniciativas iniciadas con su predecesora, la administración de Alfaro lanzó en diciembre pasado una campaña de limpieza del corredor fluvial llamada Revive el Río Santiago. Esta campaña, que es independiente del programa federal de restauración de cuencas, cuenta con la colaboración de nueve organismos estatales en proyectos que incluyen la construcción o mejora de 13 plantas de tratamiento de aguas residuales. Mientras tanto, el estado ha prometido intensificar las inspecciones ambientales, multas para los contaminadores y mejoras en el servicio de atención médica.

Después de una reunión conjunta estatal y federal en febrero sobre los esfuerzos de limpieza y atención médica, Toledo de la Semarnat respaldó Revive el Río Santiago. Para ayudar a coordinar el esfuerzo, se estableció un grupo de trabajo estatal y federal compuesto por representantes del gobierno del estado de Jalisco, la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.

Promesa de financiamiento

Benjamín Ortiz, director de cuerpos de agua y regiones prioritarias de la Semarnat, dice que la designación de la cuenca del río Santiago y otras cinco fuentes de agua como zonas de restauración ecológica —una medida que requerirá un decreto presidencial— abrirá el camino para fondos federales adicionales. Sin embargo, dada la profundidad de la crisis ecológica del río, algunos expertos y pobladores se muestran escépticos sobre el aluvión de declaraciones recientes del gobierno.

Una de ellos es McCulligh, que lleva años estudiando los problemas socioambientales del río Santiago. (Véase “Activista promueve limpieza de río Santiago en México” — EcoAméricas, julio 2007.) Ella recuerda “muchas, muchas” reuniones en los últimos años en las que participaron pobladores y diferentes organismos gubernamentales, incluido un grupo de trabajo multiinstitucional similar al actual. Aquel grupo se formó después de que un niño de ocho años, Miguel Ángel López Rocha, cayó al río Santiago en 2008, se enfermó, fue hospitalizado y murió. Al declarar que el niño sufrió envenenamiento por arsénico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dictaminó que la Comisión Nacional del Agua era responsable y pidió a las autoridades que aborden la contaminación.

“No es la primera vez que se realiza un trabajo interinstitucional”, dice McCulligh. “¿Hicieron algo extraordinario? No, no lo hicieron, pero el gobierno estatal no les dio prioridad como ahora”. Para McCulligh, una pregunta central será si las autoridades estatales y federales obligarán a las plantas industriales de la zona a controlar las descargas de desechos.

Para estimular tal acción, los grupos de ciudadanos han aumentado la presión. Un Salto de Vida presentó una queja en febrero ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la segunda vez que esta ha sido llamada a examinar la permanente contaminación del río en los últimos 10 años. También en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, pidió medidas de protección para las comunidades aledañas al río en El Salto y otros dos municipios. En respuesta a una queja presentada por pobladores de la cuenca del río Santiago en julio del año pasado, la comisión con sede en Washington, D.C., declaró que el Estado mexicano tenía la

“obligación de mitigar el daño ambiental significativo” y ayudar a los pobladores enfermos.

Plantas de alcantarillado no bastan

La CIDH hizo ver las muertes por enfermedad renal de 28 personas en el área de El Salto entre 2003 y 2019 y la prestación inadecuada de atención médica allí, ordenando a México que proporcione exámenes y tratamientos médicos especializados. Si bien la comisión reconoció los esfuerzos de las autoridades gubernamentales para mejorar la calidad del agua del río Santiago, enfatizó que las plantas de aguas residuales planificadas por el Estado eran inadecuadas para el tratamiento de las descargas de desechos industriales.

Antes de la intervención de la comisión, el río Santiago fue una parada en un “Toxi-Tour México” realizado en diciembre pasado por grupos ecologistas mexicanos e internacionales y al que asistieron funcionarios electos de los Estados Unidos y Europa. Anteriormente, la contaminación del Santiago había sido investigada y documentada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Comisión para la Cooperación Ambiental con sede en Montreal y el Tribunal Latinoamericano del Agua.

González, de Un Salto de Vida, espera que un nuevo escrutinio del corredor del Santiago estimule los avances tanto tiempo postergados. Entre estos, dice, están compilar registros comunitarios de salud, mapear problemas de salud ambiental, construir infraestructura de salud, frenar la contaminación del río, investigar el vínculo entre emisiones aéreas y enfermedades, y evitar que viviendas e industrias pesadas se asienten cerca unas de otras.

“Estamos luchando duro para tener el derecho de decidir lo que sucede en nuestra región”, dice González. “No sólo estamos luchando contra el gobierno, sino también contra sectores de la sociedad que están vendiendo [tierras de propiedad comunitaria] a urbanizadoras e industriales”. Usando un término popular para áreas donde se ha promovido la industria propensa a la contaminación a pesar de los riesgos que representa para las comunidades adyacentes, agrega: “Lo que nos avergüenza es que hay un pacto de silencio para reforzar las zonas de sacrificio”.

—Kent Paterson

Contactos

Alan Carmona

Portavoz
Un Salto de Vida
El Salto, México
Tel: +(52 331) 903-1613
unsaltodevida05@gmail.com

Cindy McCulligh

Investigadora
Universidad de Zacatecas
Zacatecas, México
cindymculligh@gmail.com

Benjamín Ortiz
Director de Cuerpos de Agua
y Regiones Prioritarias
Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
Ciudad de México, México
Tel: +(521 222) 162-3709
benjamin.ortiz.semarnat.gob.mx

Entrevista:

Juez salvadoreño insta a supervisión más rigurosa en medio de la pandemia

Samuel Lizama es presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de El Salvador. Su tribunal constituye la máxima autoridad ambiental en el sistema judicial del país, dado su papel como árbitro de las cuestiones generadas por los tres juzgados ambientales del país. Cuando se estableció el primer juzgado ambiental de El Salvador en 2014, Lizama, entonces juez con 11 años de experiencia, fue elegido para encabezarlo. Se convirtió en presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en 2017. Las restricciones gubernamentales provocadas por la crisis del Covid-19 han detenido temporalmente el trabajo de los juzgados ambientales, aunque otros tribunales han estado funcionando de manera limitada. Por su parte, la principal autoridad ambiental del país, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ha desempeñado un papel en gran medida pasivo durante la crisis, suscitando críticas de algunos. Lizama habló recientemente con el corresponsal de EcoAméricas Gerardo Arbaiza sobre los desafíos planteados por la pandemia y otras problemáticas.

¿Cómo se ve afectada la justicia ambiental salvadoreña por la interrupción de la actividad de los juzgados ambientales?

Esta pandemia tomó a nuestras autoridades por sorpresa. Creo que las operaciones de los juzgados ambientales podrán reanudarse en turnos. Estos servicios de justicia son importantes para la comunidad, y creo que deberían comenzar a restablecerse, con algunas limitaciones y esfuerzos para evitar grandes concentraciones de personas.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en el monitoreo ambiental?



Las instituciones ambientales tienen un papel y deberían desempeñarlo ahora, ajustándose a las circunstancias actuales. El MARN tiene una serie de funciones que no puede ignorar, incluso en tiempos de cuarentena. El control y monitoreo ambiental debe ser llevado a cabo por el MARN. Otro de los deberes del MARN ahora incluye monitorear la eliminación de desechos sólidos y bioinfecciosos que se generan durante esta pandemia. También es responsable de supervisar la calidad y disponibilidad del agua; y en momentos como estos, es muy importante que realice esa función. En nuestro país, también estamos entrando en la temporada de lluvias, y es necesario establecer prácticas agrícolas que puedan ayudar a proteger el suelo, lo cual puede llevarse a cabo perfectamente durante este período.

¿Qué piensa de las críticas de que el MARN ha perdido relevancia durante la crisis?

Tal vez se necesitaba del MARN para otras funciones, pero la ley determina las responsabilidades de cada ministerio, y el MARN tiene muchas en el área de saneamiento que inciden directamente en la lucha contra el Covid-19. Actualmente, sólo hemos visto al MARN emitiendo informes sobre precipitación y condiciones sísmicas.

Dejando de lado la crisis del Covid-19, ¿por qué las autoridades del gobierno salvadoreño parecen mostrar poco interés en la salud del medio ambiente?

Creo que hemos tenido una falta de liderazgo ambiental en la esfera pública, lo que significa que los responsables de proteger el medio ambiente no han hecho su trabajo. Dado eso, es importante que se active el liderazgo ambiental de la sociedad civil. Creo que la falta de liderazgo es el resultado de que el medio ambiente no es una parte importante de las agendas de los gobiernos [que ha tenido el país]. Nunca ha sido una prioridad garantizar que los funcionarios electos tengan las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios para hacer frente a los problemas ambientales. El resultado es que las instituciones ambientales no responden a los problemas ambientales reales.

¿Qué se necesita para que los funcionarios públicos y el electorado protejan el medio ambiente?

Es tarea de los partidos políticos promover el liderazgo social con la capacidad de enfrentar los problemas ambientales actuales y futuros. Los requisitos establecidos en la Constitución de El Salvador también son un poco indulgentes. No debería ser que para ser candidato a alcalde baste con ser mayor de 21 años y vivir en el municipio donde se postula. Pero no es necesario reformar la constitución. En vez de ello, los partidos políticos y las instituciones deben promover líderes que tengan un historial de liderazgo social y conozcan los problemas [ambientales] de las áreas que desean [gobernar]. La necesidad es urgente.

¿Cuál ha sido el caso ambiental más importante decidido por los juzgados ambientales?

Uno de los más importantes ocurrió en mayo de 2016, cuando el río Magdalena fue contaminado con 250,000 galones de melaza en la comunidad de Chalchuapa [80 km] al oeste de San Salvador. El derrame fue causado por la refinería de azúcar La Magdalena, y

la contaminación mató la vida acuática en el río y afectó los recursos hidrológicos y otros recursos hasta 16 km aguas abajo. Cuando fui designado para el Juzgado Ambiental de San Salvador, presidí este caso, y se ordenó a la refinería pagar US\$1.6 millones por daños y perjuicios ambientales y emitir una disculpa pública.

¿Existe suficiente capacidad legal en El Salvador para abordar adecuadamente la degradación ambiental?

La justicia ambiental abarca las áreas penal, civil y administrativa. El MARN es responsable del área administrativa, pero no puede hacer su trabajo porque no está facultado para imponer multas, y la Asamblea Legislativa ha dejado pasar cinco años sin renovar una disposición de la Ley del Medio Ambiente que permitiría al ministerio tener este control administrativo. Creo que, en el caso de los juzgados, tenemos herramientas suficientes, como la autoridad para iniciar casos de oficio y ordenar que se detengan proyectos. Pero mientras el MARN carezca de la capacidad de imponer multas, el sistema judicial ambiental no estará completo.

¿Se mejorarían las cosas con el Acuerdo de Escazú, el tratado aún por ratificar para impulsar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales en América Latina y el Caribe?

El estado salvadoreño debe ratificar el Acuerdo de Escazú, ya que aborda el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en [la revisión de] proyectos ambientales y el acceso ciudadano a la justicia ambiental. Es un tratado muy importante que permitiría al público participar en los asuntos ambientales en lugar de simplemente ser escuchado simbólicamente. Además, aporta un componente muy significativo y novedoso al área de la regulación ambiental, que es la protección de los líderes ambientales, quienes a nivel global están arriesgando su vida debido a su activismo.